



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA LABORAL

Medellín, febrero 16 de 2023

Radicado: 05001- 31- 05-022-2019-00024-01
Demandante: MERCEDES LUISA BOTERO CORREA
Demandado: COLPENSIONES
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA Y CONSULTA
Tema: PENSIÓN DE VEJEZ

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

Atendiendo al contenido de la escritura pública 3377 de septiembre 2 de 2019 suscrita ante el Notario 9 de Bogotá, por la Cual la administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones otorga poder a la sociedad RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S. para ejercer la defensa judicial de la entidad, se le reconoce personería adjetiva a la sociedad, quien a su turno sustituye el poder en la Dra. Natalia González Henao, a quien se le reconoce personería adjetiva para representar los intereses de la accionada.

ANTECEDENTES

A través del trámite ordinario laboral pretende la señora Botero Correa se declare el derecho al reconocimiento de la pensión de vejez, la que aduce se causó como

beneficiaria del régimen de transición pensional a disfrutar desde el 13 de abril de 2011 cuando arribó las 55 años de edad, acumulaba más de 700 semanas en los 20 años previos al cumplimiento de la edad mínima, además superaba 900 semanas de cotización al momento de entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005, sin que sea susceptible la imputación de pagos por irregularidades en los pagos de su empleador.

En respuesta a la acción Colpensiones insistió en la improcedencia de la prestación al no satisfacer la densidad de cotización mínima, proponiendo entre otras la excepción de prescripción.

En sentencia que desató la litis, el fallador tras concluir que la señora Mercedes Luisa Botera causó la pensión de vejez reuniendo los requisitos de que trata el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 como beneficiaria del régimen de transición pensional en tanto arribó a los 57 años de edad el 13 de abril de 2011 y para tal data acumulaba 1102,85 semanas, de ellas 699.85 en los 20 años previos al cumplimiento de la edad mínima y para la entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005 acopiaba 917.57 semanas de cotización

En cuanto a tal densidad de cotización explicó que en toda su vida laboral acopió 1289.57 semanas que se componen de 992.29 reportadas en la historia laboral, y 313 que corresponden a inconsistencias con el empleador Rafael Antonio Ángel Jaramillo quien pese a realizar el pago completo de los ciclos corridos entre enero de 1995 a febrero de 2003, la administradora de pensiones aplicó imputaciones de pagos que reducen la densidad de cotización, sin que demuestre haber ejercido las acciones de cobro oportunas para su correcto recaudo, ya que estas solo se iniciaron en el año 2020, esto es una actuación extemporánea, posterior al pago realizado por el empleador, e incluso posterior a las múltiples solicitudes de reconocimiento pensional, lo que lleva a aplicar los efectos de la falta de

diligencia en el cobro de cara a la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la CSJ que impone tener como válidas las cotizaciones.

En este orden de ideas, satisfechos los presupuestos de causación de la pensión se dispuso su reconocimiento, en cuantía de 1 SMLMV a razón de 14 mesadas anuales, empero dados los efectos de la prescripción extintiva ordenó el pago del retroactivo pensional a partir del 26 de febrero de 2015, dada la última reclamación que presentó el mismo día y mes del año 2018. De forma conexa impuso los intereses de mora fijando como hito inicial el 26 de junio de 2018. Por último, gravó en costas a Colpensiones

Decisión que fue recurrida por la pasiva, exponiendo que no hay lugar al reconocimiento de intereses de mora en tanto la misma solo opera cuando existe una prestación debidamente concedida, lo que no ocurre en este evento en tanto la prestación solo surge con ocasión de esta decisión judicial.

ALEGATOS

Concedido el término que establece el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 Colpensiones presentó escrito donde reitera los argumentos de defensa y oposición a las pretensiones de la activa.

CONSIDERACIONES

Previo a resolver los aspectos objeto de apelación encuentra la Sala pertinente expresar que, conforme a las pruebas aportadas al proceso, las consideraciones del A quo, en el presente evento se encuentran por fuera de discusión: **1)** Que Mercedes Luisa Botero Correa nació el 13 de abril de 1956 (Pág 2 -archivo N° 3) situación que en principio la hace beneficiaria al régimen de transición pensional ya que al 1° de abril de 1994 (fecha de entrada en vigencia del sistema general

de pensiones para el sector privado) acreditaba más de 35 años de edad; **2)** Que el 25 de julio de 2013 solicitó en primera oportunidad el reconocimiento de la pensión de vejez, siendo negada en resolución GNR 229145 de 2013 aduciendo que contaba con 905 semanas cotizadas (archivo N° 25 expediente administrativo) presentados los recursos en sede administrativa sin modificación de la decisión negativa y **3)** que insistiendo en la reclamación pensional se elevó petición el 26 de febrero de 2018, negada en esta ocasión en la resolución SUB 72573 de marzo 15 de 2018 donde se señala una densidad de cotización de 992 semanas de cotización (archivo N° 3 anexos demanda).

También se encuentra por fuera de discusión que la señora Botero Correa fue afiliada al RPM a través del aportante Rafael Ángel Jaramillo desde el 01/01/1995 quien pese a presentar irregularidades en las cotizaciones, el 24 de julio de 2008 generó un pago para los ciclos corridos entre el 01/01/1995 al 28/02/2003 que corresponde a 425.71 semanas, lapso en que Colpensiones en la historia laboral solo reporta 78.85 semanas cotizadas (incluyendo las 15 semanas simultaneas en el año 1995 y 7 en el año 1996).

Así las cosas, le corresponde a esta corporación determinar la procedencia del derecho pensional previo examen de la densidad de cotización acumulada por Mercedes Luisa Botero Correa

Pues bien, respecto a la **densidad de cotización**, es necesario precisar que conforme al criterio constante de esta Sala, el incumplimiento en el pago de aportes por parte del empleador, aunado a la inobservancia de la administradora de pensiones en ejercer las acciones de cobro, no puede perjudicar al ciudadano impidiendo el acceso a los derechos pensionales, ya que se amparan los derechos del afiliado dependiente, quien como parte más débil de la relación (afiliado- empleador – administradora de pensiones) su carga corresponde a la efectiva prestación del servicio que da lugar al pago de los aportes al sistema pensional,

generando así un crédito a favor de la entidad administradora y a cargo del empleador que no pagó en tiempo los aportes respectivos.

Es así que las administradoras de pensiones deben agotar con diligencia las acciones de cobro ante los empleadores omisos, so pena de tener como válidas las cotizaciones para el reconocimiento de las prestaciones a que haya lugar (Al respecto la sentencia SL 3555 de 2021 que reitera las sentencias CSJ SL3707-2017, CSJ SL4892-2017 CSJ SL5166-2017, entre otras).

En adición ha considerado la alta corporación que la valoración que los operadores judiciales hacen de la historia laboral no puede ser mecánica, sino que deben ponderarse las circunstancias por las que se desconocen algunos ciclos, en tanto una actividad contraria implica dejar a la voluntad de las administradoras de fondos de pensiones desconocer o validar las cotizaciones (al respecto la sentencia SL 10147 de 2017)

En lo referente a la carga de la prueba respecto a las controversias que surgen a partir de las historias laborales, la Corte Constitucional ha expresado que corresponde a las administradoras de pensiones justificar y acreditar las inconsistencias, por cuanto se encuentran obligadas a desplegar las actuaciones necesarias para garantizar la veracidad, claridad y precisión de la información que allí se consigna, teniendo a su cargo el cobro de las cotizaciones. (Ver Sentencia SU 182 de 2019 y SU 405 de 2021)

Consideración que comparte la Sala de Casación Laboral de la CSJ al indicar que el Habeas data en materia pensional implica para el afiliado el derecho a exigir de las administradoras la corrección, adición, actualización de datos, en tanto tal información es trascendental para la conformación y prueba de las prestaciones del sistema (SL 4006 de 2021)

Con estas premisas se descende al **caso concreto** esta corporación avala la conclusión del A quo respecto al cómputo de las semanas de cotización por el empleador Rafael Ángel Jaramillo, quien satisfizo las cotizaciones de los ciclos corridos entre el 01/01/1995 al 28/02/2003 tal como lo reseña la historia laboral que obra en el archivo denominado GRP-SCH-HL-2017_10869131-20171012044457 del archivo “contenido CD fs. 46”, lo que permite adicionar a las 992 semanas reportadas en la historia laboral aquellas en que se generan imputaciones de pago, específicamente adicionar 306 semanas para un total de 1298.14 semanas reportadas entre el 24/08/1977 y el 30/11/2014.

Se resalta que conforme a los referentes jurisprudenciales señalados estas cotizaciones han de tenerse como válidas para el reconocimiento de las prestaciones del sistema pensional en tanto las mismas corresponde ciclos en los que existió una afiliación al sistema pensional, donde la administradora de pensiones no demuestra haber ejercido las acciones de cobro frente al empleador que de forma sistemática omitió algunas cotizaciones y que incluso posterior al mes de julio de 2008 (cuando se hizo el pago global de las cotizaciones) no se requirió al empleador, destacando que se desconoce la razón por la que se aplica una imputación a ciclos previos en tanto el pago del señor Ángel Jaramillo incluyó una porción por intereses de mora, sin que la ahora accionada afirme ni demuestre que tal pago fue deficitario y trasladando su propia desidia a la actora quien es ajena a la situación irregular, pero que de forma cierta ha afectado la consolidación del derecho pensional.

Bajo esta premisa se concluye que la actora entre el 24/08/1977 y el 30/11/2014 acumuló 1298.14, de los cuales 1112 fueron cotizadas al 13/04/2011, momento en que arribó a los 55 años de edad, cumpliendo las premisas de que trata el acto legislativo 01 de 2005, en tanto para la entrada en vigencia acumulaba 926.3 semanas cotizadas, lo que permite que el régimen de transición pensional se

extendiera hasta el 31 de diciembre de 2014, causando la prestación previa a tal data, **esto es el 13 de abril de 2011**.

Disfrute que conforme al artículo 13 del Decreto 758 de 1990 está marcado por el retiro del sistema, ora expreso por la anotación de la novedad de retiro, ora tácito por la cesación de las cotizaciones aunado a la solicitud de reconocimiento pensional, siendo esta la situación que se demostró en este caso, en tanto desde el año 2013 la actora adelanta la reclamación de la prestación siendo negada en repetidas ocasiones, siendo la última reclamación aquella que data del 26 de febrero de 2018 (según indica la resolución SUB 72573 de 2018) cesando las cotizaciones en el ciclo de noviembre de 2014, lo que permitiría fijar como fecha de inicio del pago de la prestación el 1° de diciembre de 2014.

Empero dada la inactividad en la reclamación de la prestación se generó un efecto extintivo, el que se interrumpió con la reclamación elevada el 26 de febrero de 2018, por tanto, las mesadas causadas previo al 26/02/2015 prescribieron.

Calculado el retroactivo pensional generado entre el 26 de febrero de 2015 extendido hasta el 31 de enero de 2023, en cuantía de 1 SMLMV (toda vez que la ponderación de las cotizaciones que lo fueron en tal suma o ligeramente superiores no ofrece una suma mayor) a razón de 14 mesadas anuales en tanto la prestación se causó previo al 31/07/2011 (Parágrafo transitorio 6. AL 01 de 2005) genera un retroactivo de \$90.495.978.

Año	Valor mesada	Nº mesadas	Sub total
2015	\$ 644.350	12.13	\$ 7.815.966
2016	\$ 689.454	14	\$ 9.652.356
2017	\$ 737.717	14	\$ 10.328.038
2018	\$ 781.242	14	\$ 10.937.388
2019	\$ 828.116	14	\$ 11.593.624
2020	\$ 877.803	14	\$ 12.289.242
2021	\$ 908.526	14	\$ 12.719.364
2022	\$ 1.000.000	14	\$ 14.000.000
2023	\$ 1.160.000	1	\$ 1.160.000
TOTAL			\$ 90.495.978

Retroactivo del que se autoriza a Colpensiones a realizar el descuento de los porcentajes con destino al sistema de seguridad social en salud, el que conforme al artículo 204 de la Ley 100 de 1993 se encuentra a cargo del pensionado, del que no hay lugar a excepcionar a la actora al no demostró que su residencia permanente es por fuera del territorio nacional, lo que podrá acreditar ante Colpensiones para futuras exoneraciones¹. En este sentido se revocará en lo atiente la decisión del A quo.

A partir del mes de febrero de 2023 Colpensiones seguirá pagando la prestación en cuantía de 1 SMLMV a razón de 14 mesadas anuales.

En lo referente a los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a los mismos hay lugar, en tanto no se demuestra que Colpensiones haya sido diligente en las labores de saneamiento y recaudo de las inconsistencias en la historia laboral y por el contrario en las múltiples peticiones siempre desconoció la densidad de cotización acumulada. Sin que resulten atendible los argumentos expuestos en el recurso de alzada en tanto la medida tiene como propósito resarcir los efectos de la desidia en el reconocimiento pensional bajo el entendido que la prestación una vez causada debe ser reconocida de forma expedita, toda vez que las eventuales irregularidades en el cúmulo de cotizaciones debieron haber sido saneadas de forma previa, lo que comporta el deber de diligencia que recae sobre las administradoras del régimen.

Así las cosas, vencido el término de que trata el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 el 26 de junio de 2018 hay lugar al inicio de los mentados intereses, los que cesan una vez se satisfaga el retroactivo pensional ya declarado, conclusión expuesta por el fallador unipersonal y que se confirma en esta instancia.

¹ El numeral 5 del artículo 2.1.3.17 Decreto 780 de 2016 indica “Cuando el afiliado cotizante y su núcleo familiar fijen su residencia fuera del país y reporte la novedad correspondiente a la EPS o a través del Sistema de Afiliación Transaccional y reporte en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes – PILA, el campo de “Colombiano residente en el exterior”, éste no estará obligado a aportar el porcentaje correspondiente a solidaridad.

Resta por indicar que se confirma la condena en costas, las que también se imponen a Colpensiones en esta instancia, tasando las agencias en derecho en la suma de 1 SMLMV en favor de la demandante.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **EL Tribunal Superior de Medellín, Sala Sexta de Decisión Laboral** CONFIRMA DE FORMA PARCIAL LA SENTENCIA PROFERIDA, actualizando el retroactivo pensional el que causado entre el 26/02/2015 y el 31/01/2023 asciende a **\$ 90.495.978, suma de la cual se autoriza el descuento de los porcentajes con destino al sistema de salud. en este aspecto se revoca la decisión de primera instancia.**

A partir del 01/02/2023 Colpensiones seguirá pagando la prestación en cuantía de 1 SMLMV a razón de 14 mesadas anuales.

En lo demás se confirma la sentencia impugnada.

Costas en ambas instancias a cargo de Colpensiones, en esta se tasan las agencias en derecho en la suma de 1 SMLMV.

Lo resuelto se notifica por Edicto.

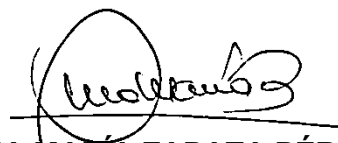
Los Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

Radicado: 05001- 31- 05-022-2019-00024-01
Demandante: MERCEDES LUISA BOTERO CORREA
Demandado: COLPENSIONES
Decisión: **CONFIRMA**
Magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado hoy 22 de febrero de 2023 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 idíbem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO